

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN N° ANTAI/AL/107-2021. Panamá, diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021).

**LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

En uso de sus facultades legales y considerando,

Que el numeral 6 del artículo 6 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, por la cual se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), dispone que la Autoridad tiene entre sus atribuciones, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Ley de Transparencia, gobiernos abiertos, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención previstas en convenciones, tratados, programas, convenios y cualquier otro acuerdo internacional o nacional en materia contra la corrupción y en pro de la transparencia gubernamental.

Que el numeral 10 del artículo 6 de dicha excerta legal, faculta a esta Autoridad a examinar de oficio o por denuncia pública la gestión administrativa en los diversos entes estatales, a fin de identificar hechos que contraríen dicha normativa, por incurrir en conductas que afecten la buena marcha del servicio público y causen erogaciones innecesarias al erario.

Que en concordancia con lo anterior, el numeral 24 del referido artículo 6 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, establece que esta Autoridad tiene la atribución de atender los reclamos, quejas y situaciones que afecten la transparencia, la ética y lucha contra la corrupción, y promover ante la institución respectiva que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno ejercicio de sus derechos.

Que, consta en este despacho denuncia presentada por los señores [REDACTED] y [REDACTED] en contra de las servidoras públicas la licenciada [REDACTED] con cargo [REDACTED] la Licenciada [REDACTED] con cargo de [REDACTED] relacionada con supuestas irregularidades administrativas que afectan la buena marcha del servicio público y / o posibles faltas al Código Uniforme de Ética de los servidores públicos.

ANTECEDENTES:

43

En investigación iniciada por las supuestas irregularidades administrativas y posible infracción a lo dispuesto en el Código de Uniforme de ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del gobierno Central, donde señalan lo siguiente:

“Primero: Licenciada [REDACTED] desde mediados del mes de diciembre de 2018, la subdirectora Nacional de Compras, Licenciada [REDACTED] en conjunto con la Subdirectora nacional de Recursos Humanos, Licenciada [REDACTED] ambas servidoras públicas de la Caja del Seguro Social, han promovido innumerables procesos disciplinarios en contra de los funcionarios públicos que hemos desempeñado labores en la Dirección Nacional de Compras, tanto jefes de unidades ejecutoras, cotizadores, supervisores, abogados, secretarias, mensajeros, recepcionistas y demás funcionarios que de acuerdo a la apreciación personal y subjetiva de las mismas, deban ser relacionados a estos procesos disciplinarios, sin atender las normas que para tales fines consagra el Reglamento Interno de Personal vigente a la fecha.

Segundo: Que el artículo 107 del Reglamento Interno de Personal, dispone que, ante la comisión o posible comisión de una falta por parte de un funcionario, se deberá elaborar un informe preliminar por parte del jefe inmediato el cual será puesto de conocimiento, se permitirá el acceso al proceso, a presentar pruebas y a ser escuchado en sus descargos, tal como se desprende, a saber:

“Artículo 107: De la comisión o posible comisión de faltas, debe haber un informe escrito del jefe inmediato. Dicho informe deberá ser de conocimiento del funcionario, al cual se le debe garantizar el acceso al mismo, y a las pruebas que se agreguen a la investigación, a la práctica de las que solicite y sean conducentes, así como ser oído en declaración de descargo.
En los casos de suspensión o destitución, el Director General requerirá previamente el informe de la Dirección Nacional de Personal y de la Junta Asesora Médica cuando procediera y apreciará las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, al momento de resolver.” (El resaltado en negrita es nuestro)

Tercero: Que la Subdirectora Nacional de Compras y la Subdirectora Nacional de Recursos Humanos, no cumplieron con las exigencias establecidas en el artículo 107 del Reglamento Personal, toda vez que ninguno de los procesados conocer el contenido del informe elaborado por la Lic. [REDACTED] violándose el debido proceso y las garantías del contradictorio, adicional a ello, proporcionó los nombres de las personas que debían ser vinculadas a las investigaciones.

Mediante Resolución de veintidós (22) de abril de dos mil diecinueve (2019), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información dispuso iniciar

investigación administrativa que nos ocupa; no obstante, la última actuación que consta en el infolio data de trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

44

DECISIÓN DE ESTA AUTORIDAD:

En consecuencia, han transcurrido más de tres (3) meses sin que haya efectuado actuación alguna en el proceso administrativo iniciado por denuncia presentada por los señores [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] en contra de las servidoras públicas la licenciada [REDACTED] con cargo de Sub-Directora Nacional de Compras de la Caja del Seguro Social y la Licenciada [REDACTED] con cargo de Sub-Directora Nacional de Recursos Humanos de la Caja del Seguro Social.

En este sentido, el artículo 161 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, que regula el proceso administrativo, establece lo siguiente:

“Artículo 161. Paralizado un proceso por causa imputable al administrado, la Administración le advertirá inmediatamente que, transcurridos tres meses, se producirá su caducidad, con archivo de las actuaciones.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de la acción del particular, pero los procesos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Declarada la caducidad de la instancia, el proceso no podrá ser reabierto, sino después de transcurrido un año, contado desde la fecha en que se declaró la caducidad”.

En concordancia, el numeral 17 del artículo 201 de la referida excerta legal, define la caducidad de instancia de la siguiente forma:

“Artículo 201. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, deben ser entendidos conforme a este glosario:

1. ...

17. Caducidad de la instancia. Medio extraordinario de terminación del proceso, a causa de la inactividad del peticionario después de cumplido el plazo legal respectivo, mediante resolución que así lo declara”.

En igual sentido, el artículo 1103 del Código Judicial, norma de aplicación supletoria al presente proceso en virtud del artículo 202 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, dispone:

“1103. Cuando el proceso se encuentra paralizado por más de tres meses, el juez, de oficio o a solicitud de parte, decretará la caducidad de la instancia. El término se contará desde la notificación del último acto, diligencia o gestión y no correrá mientras el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de las partes o por disposición legal o judicial. ...”

45

Del análisis de las precitadas disposiciones legales, se colige que la inactividad de los denunciantes o la paralización del proceso durante el período de tres (3) meses o más, produce la figura jurídica conocida como caducidad de la instancia, cuyo efecto es la terminación del proceso, con el objetivo de evitar la litispendencia indefinida.

De lo anterior, se observa que se tienen cumplidos los presupuestos establecidos en la ley, corresponde decretar la caducidad de la instancia en el proceso que nos ocupa, y ordenar el cierre y archivo del proceso.

Por los hechos expuestos, la Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA en la denuncia iniciada por los señores [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] en contra de las servidoras públicas la licenciada [REDACTED] con cargo de Sub-Directora Nacional de Compras de la Caja del Seguro Social y la Licenciada [REDACTED] [REDACTED] con cargo de Sub-Directora Nacional de Recursos Humanos de la Caja del Seguro Social, por supuestas irregularidades administrativas que afectan la buena marcha del servicio público y / o posibles faltas al Código Uniforme de Ética de los servidores públicos.

SEGUNDO: ORDENAR EL CIERRE Y ARCHIVO del expediente correspondiente.

TERCERO: ADVERTIR que, contra la presente Resolución cabe Recurso de Reconsideración, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

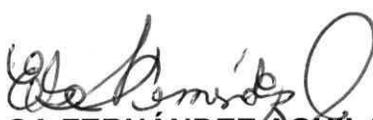
Artículo 299 de la Constitución Nacional.

Artículos 4, 6, numerales 6, 10 y 24, de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013.

Artículos 161; 201, numeral 7, 202 y demás concordantes de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000.

Artículo 1103 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase


MGTRA. ELSA FERNÁNDEZ AGUILAR.
Directora General


EFA/OC/GS